



SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO

Medellín, dieciocho de agosto de dos mil veintitrés.

23-060

Proceso: ORDINARIO LABORAL- apelación.
Demandante: **BEATRIZ ELENA RAMIREZ.**
Demandado: **COLPENSIONES E.I.C.E, PORVENIR S.A. y COLFONDOS S.A.**
Radicado No.: 05001-31-05- **012-2022-00244-01.**
Tema: ineficacia traslado
Decisión: **CONFIRMA Y ADICIONA SENTENCIA.**

La Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, conformada por los Magistrados **MARÍA NANCY GARCÍA GARCÍA, MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO** y como ponente **ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**, procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por Porvenir S.A., contra la sentencia de primera instancia emitida en el proceso de la referencia.

Se reconoce personería al Doctor MAURICIO LARA GARCIA, mayor de edad, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 1.12.442.661 de Medellín con Tarjeta Profesional No. 273.006 del C.S.J., para que represente los intereses de COLPENSIONES E.I.C.E., conforme sustitución de poder que le hiciera el apoderado SANTIAGO MUÑOZ MEDINA identificado con la Cédula de Ciudadanía No.16.915.453 expedida en Cali, obrando en su condición de representante legal suplente de la sociedad MUÑOZ MEDINA ABOGADOS S.A.S. legalmente constituida mediante documento privado del 25 de abril de 2.015, inscrita en la Cámara de Comercio de Cali bajo el registro No 6.064 del Libro IX, identificada con NIT. No. 900.847.273-4 y en ejercicio de las facultades otorgadas mediante escritura pública No. 3.365 de 2019 de la Notaría Novena del Círculo de Bogotá.

El Magistrado de conocimiento, doctor **ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**, en acatamiento de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, sometió a consideración de los restantes integrantes el proyecto aprobado en Sala virtual mediante **ACTA 028** de discusión, que se adopta como sentencia, en los siguientes términos:

1. SÍNTESIS FÁCTICA y ANTECEDENTES

1.1. LO PRETENDIDO

Solicitó la demandante, se declare la **INEFICACIA** del traslado al RAIS administrado por Porvenir S.A., considerando que ha estado afiliada a Colpensiones E.I.C.E. sin solución de continuidad. Que se condene a Porvenir S.A. a devolver al RPM todos los valores que hubiese recibido por motivo de afiliación, como cotizaciones, bonos pensionales, sumas de las aseguradoras, con todos sus frutos como; rendimientos financieros, intereses y gastos de administración. Que se condene a Colpensiones E.I.C.E. a validar los aportes e incorporarlos en la historia laboral de la accionante. Finalmente solicitó se condene en costas y agencias en derecho a las entidades demandadas.

1.2. PARA FUNDAMENTAR SUS PRETENSIONES, EXPUSO LOS SIGUIENTES HECHOS:

- ✓ Que se trasladó del RPM al RAIS el 1 de mayo del 2000.
- ✓ Que la AFP accionada, omitió el cumplimiento del deber de buen consejo, pues no brindó una información clara y completa de las ventajas, desventajas y consecuencias del traslado.
- ✓ Que el 27 de mayo de 2022, solicitó al RAIS información sobre la pensión de vejez y la aceptación del traslado de régimen.
- ✓ Que el 27 de mayo de 2022, solicitó ante Colpensiones el traslado de régimen pensional, entidad que en respuesta del 31 de mayo de la misma anualidad negó la pretensión.

1.3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

Colpensiones E.I.C.E, se opuso a la totalidad de las pretensiones; y estimó como ciertos los hechos relativos al traslado de régimen pensional y la solicitud de traslado incoada ante esta entidad. Frente a los demás supuestos facticos adujo que no le constan, considerando que son actos realizados de manera voluntaria, en donde la entidad no tuvo participación.

Porvenir S.A. se opuso a la totalidad de las pretensiones; y no aceptó ningún hecho del libelo demandatorio. Frente al traslado de régimen pensional, manifestó que a la accionante se le brindó asesoría respecto a los regímenes pensionales, a sus riesgos, condiciones, ventajas y desventajas. Frente al RAIS, resaltó que a la accionante se le indicó que podría pensionarse a la edad que escogiera, siempre y cuando el capital acumulado en su Cuenta de Ahorro Individual le permita obtener una mesada pensional superior al 110% del SMLMV, la existencia de excedentes de libre disponibilidad, la devolución de saldos, la posibilidad de heredar el capital de la cuenta de ahorro individual en caso de fallecer sin beneficiarios, la pensión de garantía mínima, entre otros.

Finalmente, Colfondos S.A, se opuso a las pretensiones incoadas; y no aceptó los hechos de la demanda. Frente al traslado a esta entidad, indicó que a la demandante se le brindó una asesoría de manera integral y completa, sobre el régimen general de pensiones; y que el traslado se dio de forma

voluntaria después de analizar los beneficios y desventajas de los diferentes regímenes pensiones o administradoras de pensiones.

1.4. DECISIÓN PRIMERA INSTANCIA.

Mediante sentencia proferida el 2 de marzo de 2023, el Juzgado Doce Laboral del Circuito de Medellín, dispuso lo siguiente:

“PRIMERO: DECLARAR la INEFICACIA del traslado de régimen efectuado por la señora BEATRÍZ ELENA RAMÍREZ, identificada con la C.C. 42.678.197 al régimen de ahorro individual, efectuado el 05 de mayo de 1995.

SEGUNDO: CONDENAR A ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A. a trasladar el monto del capital ahorrado por BEATRÍZ ELENA RAMÍREZ, desde el 05 de mayo de 1995, hasta el momento en que se haga el traslado efectivo del capital con sus respectivos rendimientos financieros a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES, así como a devolver a la misma todos los valores que hubiere recibido con motivo de la afiliación del mencionada como cotizaciones, bonos pensionales, sumas adicionales de la aseguradora, con todos sus frutos e intereses como los dispone el artículo 1.746 del C.C., esto es, con los rendimientos que se hubieren causado, así como los descuentos efectuados para garantía de pensión mínima, gastos o cuotas de administración y las sumas adicionales de la aseguradora y reaseguradora.

Estos traslados deben ser asumidos así:

- *ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A., con cargo a sus propios recursos trasladará a COLPENSIONES todos los dineros que reposen en la cuenta de ahorro individual de la demandante, incluyendo las cotizaciones completas y bono pensional, sin lugar a los descuentos por los conceptos antes aludidos que se hubiesen podido generar por el período durante el cual la accionante ha permanecido afiliada a dicho Fondo, esto es, entre el 01 de mayo de 2000 y hasta la fecha en que se realice el traslado efectivo.*
- *SOCIEDAD COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS con cargo a sus propios recursos trasladará a Colpensiones los descuentos que efectuó a las cotizaciones de la demandante para garantía de pensión mínima, gastos o cuotas de administración y las sumas adicionales de la aseguradora y reaseguradora mientras la demandante estuvo afiliada: esto es, entre el 01 de enero de 1999 y hasta el 30 de abril de 2000.*
- *ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A. con cargo a sus propios recursos trasladará a Colpensiones los descuentos que efectuó a las cotizaciones de la demandante para garantía de pensión mínima, gastos o cuotas de administración y las sumas adicionales de la aseguradora y reaseguradora mientras la*

demandante estuvo afiliada: esto es, entre el 25 de mayo de 1995 y hasta el 31 de diciembre de 1998.

Sumas que deberán ser debidamente INDEXADAS al momento de su depósito efectivo en COLPENSIONES.

Se advierte que, si la sumatoria de todos los conceptos que se ordena trasladar, resultare inferior al valor total del aporte legal correspondiente más los rendimientos que se hubieran generado en caso de que la demandante hubiera permanecido en el Régimen de Prima Media, serán las referidas AFP quienes asuman la diferencia que resultare, en proporción al período durante el cual la mencionada permaneció afiliado a estas Administradoras.

Se ordenará a las AFP llamadas a juicio a entregar a COLPENSIONES, dichas sumas de dinero dentro de los treinta (30) días siguientes a la ejecutoria de la presente sentencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 16 del Decreto 692 de 1994.

TERCERO: ORDENAR a COLPENSIONES, a recibir de la ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A y de la SOCIEDAD COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS, los valores aludidos, y a incorporarlos como aportes pensionales en la historia laboral de la demandante, imputados a los periodos en que fueron cotizados en el RAIS y de acuerdo al IBC que fueron aportados, las que habrán de tenerse como válidas para el reconocimiento de las prestaciones del sistema pensional.

CUARTO: DECLARAR infundadas las excepciones propuestas por las codemandadas.

QUINTO: COSTAS a cargo de las codemandadas ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A y de la SOCIEDAD COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS en favor de la demandante. Sin costas a cargo de COLPENSIONES. Se fijan las agencias en derecho en esta instancia en la suma de \$1.160.000 a cargo de ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A., y en la suma de \$1.160.000 a cargo de COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS.

SEXTO: Ordenar el envío del expediente a la Sala Laboral del TSM para que surta el grado jurisdiccional de la consulta en favor de COLPENSIONES, en caso de no ser apelada esta decisión por dicha entidad.”

Dentro del término concedido por la ley, Porvenir S.A. sustentó recurso de apelación.

2. ARGUMENTOS.

2.1. DE LA JUEZ PARA DECIDIR.

La decisión se motivó en el incumplimiento del deber de información por parte de las administradoras del RAIS, en quienes recaía la carga de acreditar la existencia de una asesoría clara, completa y veraz, lo que no ocurrió, sujetándose para el efecto en las sub-reglas sentadas en la línea jurisprudencial de la Sala de Casación Laboral.

2.2. RECURSO DE APELACIÓN PRESENTADO POR PORVENIR S.A.

Resaltó que no existen razones fácticas o jurídicas para declarar la ineficacia, teniendo en cuenta que la accionante no acreditó que estuvo afiliada al RPM, por lo que no es dable aplicar la línea jurisprudencial de la C.S.J., aunado a que en el interrogatorio de parte manifestó que a vinculación al RAIS se dio de forma libre y voluntaria, por lo que no se puede aplicar la sanción contenida en los artículos 271 y 272 de la Ley 100 de 1993. Destacó que la accionante se trasladó varias veces de forma horizontal entre administradoras del RAIS, ratificado su voluntad de permanecer afiliada a dicho régimen pensional.

De otro lado, adujo que la inconformidad de la demandante, no se enfoca en cómo se dio su vinculación al RAIS, sino que va direccionada al incumplimiento de una expectativa económica, sin que esta pueda entenderse como un motivo suficiente para que se declare la ineficacia.

Frente al incumplimiento probatorio sobre la entrega de información suficiente, manifestó que solamente hasta el año 2016, mediante la Circular 016 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, se les empezó a exigir a los fondos privados guardar un soporte de entrega de información distinto al formulario de afiliación, por lo cual no puede considerarse que el fondo se encuentre en una mejor posición probatoria para acreditar el deber de información que le asiste. Aunado a esto, resaltó que al afiliado también le corresponde el cumplimiento de un deber de diligencia y cuidado frente a sus negocios, el cual fue incumplido por la demandante, pues no realizaba preguntas, no leyó el formulario de afiliación, y no se acercó a las oficinas de la AFP a solicitar información, por lo que aquella no puede beneficiarse de su propia culpa. Y teniendo en cuenta que la accionante no tenía afiliación previa al RPM, el declarar la ineficacia de la afiliación ocasionaría que aquella quede sin régimen pensional.

En el evento de confirmar la providencia de primera instancia, solicitó se revoquen las condenas de indexación, traslado de bono pensional, y traslado de gastos de administración, sumas de seguros previsionales y reaseguros. En primer lugar, destacó que el detrimento económico de los descuentos se vería resarcido con el traslado de los rendimientos financieros, por lo que la indexación representaría una condena doble en contra de la AFP, y un enriquecimiento sin causa en favor de Colpensiones. En segundo lugar, frente al bono pensional; consideró que, bajo los efectos de la

ineficacia, este no tuvo que haberse generado, y por el contrario, debe ser restituido a la oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. En tercer lugar, frente al traslado de gastos de administración, sumas de seguros previsionales y reaseguros, resaltó que estos rubros no se encuentran en el patrimonio de la AFP, aunado a que los gastos de administración, corresponden a descuentos dispuestos en el artículo 20 de la Ley 100 de 1993, los cuales contribuyeron en la generación de rendimientos financieros; resaltó que la sumas correspondientes a seguros previsionales también se descuentan en el RPM, y a su vez fueron pagados a una aseguradora para cubrir las contingencias, teniendo en cuenta que no son valores que no hacen parte del capital que va a financiar la pensión de vejez de la demandante.

Finalmente, frente a las costas procesales adujo que no es procedente, pues la AFP siempre obró de buena fe, cumpliendo con las disposiciones normativas vigentes para el momento del traslado.

2.3 ALEGATOS DE CONCLUSIÓN.

2.3.1 PRESENTADOS POR COLPENSIONES E.I.C.E.

Solicitó se revoque la sentencia de primera instancia, argumentando que la decisión, no tuvo en cuenta las implicaciones económicas y administrativas que representa, teniendo en cuenta que la Administradora no participó en la celebración del contrato de vinculación, ni hizo parte del uso de maniobras contrarias a la ley para obtener el traslado de los aportes de los afiliados con ocasión de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993. Aunado a lo anterior adujo que la accionante se encuentra inmersa en una prohibición legal para retornar al RPM, la cual se determina en el artículo 2 de la ley 797 de 2003, el cual modificó el artículo 13 de la ley 100 de 1993. Bajo este entendido, consideró que a declaración injustificada de inejecia del traslado de un afiliado del RPM a RAIS, afecta la sostenibilidad financiera y pone en peligro el derecho fundamental a la seguridad social de los demás afiliados, pues Colpensiones como un tercero, no puede inferir en los convenios estipulados entre las partes que celebraron el contrato de afiliación, pues la entidad debe considerarse como un tercero de buena fe en el acto jurídico de traslado, es decir, es inoponible frente a un negocio jurídico ineficaz, siendo procedente mantener los efectos de la afiliación al RAIS frente a Colpensiones.

En el evento de confirmarse la decisión, solicitó que se ordene el retorno de los valores que la AFP hubiere recibido con motivo de la afiliación de la parte actora, como cotizaciones, bonos pensionales, sumas adicionales de la aseguradora de forma indexada, con todos sus frutos e intereses como los dispone el artículo 1746 del Código Civil, esto es, con los rendimientos que se hubieren causado y como lo estableció en su momento la sentencia de la CSJ 68.838 de mayo 8 de 2019, que remite a las sentencias SL 31989 - 2008; SL 4964 de 2018, SL 4989 de 2018 y SL 1421 de 2019, además de la sentencia SL 1452-2019.

2.3.2 PRESENTADOS POR LA PARTE DEMANDANTE.

Adujo que, en caso de confirmarse la sentencia de primera instancia, se condene en costas y agencias en derecho a los apelantes, teniendo en cuenta la tasa máxima permitida según el acuerdo PSAA16-10554 en sus artículos 5 y 2, y el numeral 4 del artículo 366 del C.G.P. Lo anterior, teniendo en cuenta el desgaste desmesurado del aparato judicial ocasionado por los demandados.

2.3.3 PRESENTADOS POR PORVENIR S.A.

En primer lugar, resaltó que no existían razones fácticas y jurídicas para declarar la ineficacia del traslado, pues la decisión se tomó de forma espontánea y sin presiones, cumpliendo los requisitos exigidos por la normatividad, y después de brindar la información necesaria, y obligatoria para la época. Destacó que la accionante no cumplió su deber de diligencia y cuidado en sus propios negocios, lo cual conlleva a que la misma no pueda ser beneficiaria de su propia culpa o negligencia en su actuar.

Adujo que, la prueba documental que extraña la juez de primera instancia en su fallo, frente a aquellos documentos que acrediten la entrega de información, no era una obligación vigente para el momento del traslado de la parte actora, pues esta obligación surgió con la Circular 016 de 2016 de la Superintendencia financiera de Colombia, aunado a que la obligación del buen consejo, la doble asesoría, e incluso la de desincentivar la afiliación surgieron a partir del año 2010 y 2014, por lo que no es cierto que la AFP se encuentra en una mejor posición probatoria que acredite lo solicitado, y mucho menos debe exigirse su aplicación de manera retroactiva.

En caso de confirmarse la decisión de primera instancia, solicitó que el traslado de los valores ahí ordenados no se haga de forma indexada, pues los efectos de la declaratoria de la ineficacia son los propios del concepto de las restituciones mutuas, por tanto, el detrimento del valor económico se resarciría con los rendimientos financieros que se generaron debido a la buena gestión de los recursos de la demandante, de no declararse así, se constituiría una condena doble en contra de la AFP y un enriquecimiento sin causa en favor de Colpensiones, atentando así contra la sostenibilidad financiera del Sistema de Seguridad Social en Pensiones.

Finalmente, con relación a las costas procesales, indicó que no es procedente por cuanto la entidad siempre obró con buena fe objetiva, y en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes para la época del traslado.

3 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA JURÍDICO EN ESTA INSTANCIA.

De acuerdo con lo planteado en el recurso de alzada, se establecerá si es dable declarar la ineficacia de la afiliación de la demandante a la sociedad administradora de fondo de pensiones a través de la cual se trasladó al régimen de ahorro individual con solidaridad, analizando lo atinente a la aplicabilidad de lo que en torno al tema ha dispuesto la Corte Suprema de Justicia. En caso afirmativo se determinará qué haberes le corresponde retornar a COLFONDOS S.A. y PORVENIR S.A.

Así mismo, conforme lo señalado por nuestro órgano de cierre, se examinará en grado jurisdiccional de consulta aquellos aspectos que pese a ser adversos Colpensiones, no fueron objeto del recurso de apelación, al ser el Estado garante dicha entidad conforme lo normado en el art. 69 del CPT y la SS, disposición en virtud de la cual se faculta a este órgano a adicionar, aclarar y/o modificar la providencia en los ítems que resulten necesarios.

4 CONSIDERACIONES.

A juicio de esta Magistratura, el corpus argumentativo que ha construido la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia para este asunto de la ineficacia de los traslados, se ha ido ampliando con el paso de los años. Es así como en la sentencia con radicado 31.989 de 2008, reiterada en las sentencias de radicación 31.314 del 09 de septiembre de 2008 y 33.083 del 22 de noviembre de 2011, la Corte abordó el estudio del asunto bajo el enfoque de la nulidad del acto, acontecida como consecuencia de un vicio en el consentimiento al suscribir los formularios de afiliación con los cuales se materializaba su traslado al RAIS, señalando que dicho consentimiento se afectó determinadamente por el engaño al que fueron sometidos por parte de los asesores de los Fondos de Pensiones demandados y que los llevó a tomar una decisión que iba contra sus intereses.

Posición que mudó posteriormente, para adscribirse a lo que ha denominado la ineficacia, cuando adujo que *solo a través de la demostración de la existencia de la libertad informada para el cambio de régimen, es que el juzgador podría avalar su transición; no se trata de demostrar razones para verificar sobre la anulación por distintas causas fácticas, sino de **determinar si hubo eficacia en el traslado.*** (Sentencia con radicado 46.292 de 2014).

Desde un comienzo, la tesis de la ineficacia se ha apoyado en dos disposiciones normativas contenidas en la Ley 100 de 1993: el literal b) del artículo 13, que señala el carácter libre y voluntario de la elección del respectivo régimen y las posibles sanciones para quien atente contra ese derecho; y el artículo 271, donde se establecen las respectivas sanciones para quienes coarten esa libre selección al afiliarse y se indica que la misma quedará sin efecto.

Al desecharse la vía de la nulidad, ya NO es preciso acudir a lo normado en el art. 1750 del Código Civil, que contempla el plazo de cuatro años para interponer la acción de rescisión por nulidad relativa, ni tampoco resultó posible que con la re-asesoría que los Fondos privados brindaban en muchas ocasiones, se pudiera convalidar ese traslado original.

Por las consecuencias que la Sala Laboral ha derivado de la ineficacia de los traslados al RAIS, resulta claro que ha optado por la ineficacia por inexistencia del acto jurídico, en este caso, por la ausencia total de consentimiento al momento de la afiliación o del traslado, siendo ese consentimiento un elemento de la esencia del negocio.

Punto en que la jurisprudencia del trabajo se ha explayado en razones para explicar cómo en los casos donde ha prosperado la declaratoria de la ineficacia, se ha estado en ausencia de un **consentimiento informado**, entendido como *un procedimiento que garantiza, antes que aceptar un ofrecimiento o un servicio, la comprensión por el usuario de las condiciones, riesgos y consecuencias de su afiliación al régimen. Vale decir, que el afiliado antes de dar su consentimiento, ha recibido información clara, cierta, comprensible y oportuna.* (Sentencia con radicado 68838 de mayo de 2019). Lo cual en ningún caso puede subsanarse con la firma en señal de aceptación en un formato previamente determinado por la AFP.

Ese deber de información ha estado presente desde la creación del Sistema de Seguridad Social Integral en Colombia. E incluso desde antes. En efecto, el Decreto 663 de 1993, «Estatuto Orgánico del Sistema Financiero», aplicable a las AFP desde su creación, prescribió en el numeral 1° del artículo 97, la obligación de las entidades de «suministrar a los usuarios de los servicios que prestan la información necesaria para lograr la mayor transparencia en las operaciones que realicen, de suerte que les permita, a través de elementos de juicio claros y objetivos, escoger las mejores opciones del mercado».

La propia Corte, en la sentencia 68.838, multireferenciada, elabora un cuadro que intenta mostrar la evolución normativa en la materia. Así:

Etapas acumulativas	Normas que obligan a las administradoras de pensiones a dar información	Contenido mínimo y alcance del deber de información
Deber de información	Arts. 13 literal b), 271 y 272 de la Ley 100 de 1993	Ilustración de las características, condiciones, acceso, efectos y riesgos de cada uno de los regímenes pensionales, lo que incluye dar a conocer la existencia de un régimen de transición y la eventual pérdida de beneficios pensionales
ETAPA EN LA QUE SE ENCONTRABA LA DEMANDANTE	Art. 97, numeral 1.º del Decreto 663 de 1993, modificado por el artículo 23 de la Ley 797 de 2003 Disposiciones constitucionales relativas al derecho a la información, no menoscabo de derechos laborales y autonomía personal	

Deber de información, asesoría y buen consejo	Artículo 3.°, literal c) de la Ley 1328 de 2009 Decreto 2241 de 2010	Implica el análisis previo, calificado y global de los antecedentes del afiliado y los pormenores de los regímenes pensionales, a fin de que el asesor o promotor pueda emitir un consejo, sugerencia o recomendación al afiliado acerca de lo que más le conviene y, por tanto, lo que podría perjudicarle
Deber de información, asesoría, buen consejo y doble asesoría.	Ley 1748 de 2014 Artículo 3.° del Decreto 2071 de 2015 Circular Externa n.° 016 de 2016	Junto con lo anterior, lleva inmerso el derecho a obtener asesoría de los representantes de ambos regímenes pensionales.

Se exige entonces una índole de consentimiento tan específico por parte de un afiliado, que una mínima variación en el proceso de asesoría comporta la declaración de que hubo ausencia total de consentimiento y, por lo mismo, ineficacia por inexistencia del acto jurídico.

Pero, además, al invertirse la carga de la prueba, le basta a la actora afirmar que no obtuvo la información adecuada cuando transitó entre los regímenes, para que sea el fondo de pensiones el que deba desplegar la actividad probatoria necesaria para demostrar ese cabal acompañamiento. En tal sentido, se insiste, ni el paso del tiempo impide accionar contra un acto que no existió ni la oportuna re-asesoría, cuando ella se presenta, puede sanear lo que feneció al nacer.

Un párrafo de la pluricitada sentencia 68.838 de 2019 es elocuente:

De hecho, la regla jurisprudencial identificable en las sentencias CSJ SL 31989, 9 sep. 2008, CSJ SL 31314, 9 sep. 2008 y CSJ SL 33083, 22 nov. 2011, así como en las proferidas a la fecha CSJ SL12136-2014, CSJ SL19447-2017, CSJ SL4964-2018, CSJ SL4989-2018 y SL1452-2019, es que las administradoras de fondos de pensiones deben suministrar al afiliado información clara, cierta, comprensible y oportuna de las características, condiciones, beneficios, diferencias, riesgos y consecuencias del cambio de régimen pensional y, además, que en estos procesos opera una inversión de la carga de la prueba en favor del afiliado.

La mirada censora de la Corte sobre estos procedimientos de las AFP se ha ido ampliando, desde los afiliados que tenían el beneficio de transición o estaban próximos a pensionarse, hasta toda clase de afiliados. Este último fallo lo reafirma:

Lo anterior, se repite, sin importar si se tiene o no un derecho consolidado, se tiene o no un beneficio transicional, o si está próximo o no a pensionarse, dado que la violación del deber de información se predica frente a la validez del acto jurídico de traslado, considerado en sí mismo.

Así las cosas, tanto del recuento realizado como del interrogatorio absuelto por la demandante, se desprende, de un lado, que para la época del traslado inicial al RAIS, concretamente el 25 de mayo de 1995, fecha en la cual suscribió el formulario de afiliación a Colpatria hoy Porvenir S.A (fl 39 del archivo 07 del expediente digital), existía la normatividad ya citada que aludía la existencia de un **deber**

de información, y de otro lado, que escaso era el conocimiento que tenía la actora respecto del funcionamiento de ambos regímenes, estando el traslado en su momento motivado por la ausencia de una asesoría integral en donde se indique las características del RAIS, y las ventajas y desventajas que acarrearía el traslado de régimen pensional.

Y es que expresamente la señora BEATRIZ ELENA RAMIREZ, en el aludido interrogatorio expuso que su nivel de estudios era universitario, desempeñándose como Técnica de Presupuesto en la Alcaldía de Copacabana. Respecto al traslado a Colpatria hoy Porvenir S.A., adujo que, cuando ingreso a laborar en la administración municipal, el área de Recursos Humanos realizó la afiliación a dicha AFP sin que medie una asesoría, aclaró que la motivación para cambiarse de régimen, está relacionada con las observaciones de compañeros de trabajo, quienes le indicaron que era más ventajoso estar en Colpensiones, entre las observaciones que se le hicieron, resaltó que el monto de la mesada pensional en Colpensiones, sería superior al que se reconocería en el Fondo Privado.

Respecto a la movilidad efectuada a Colfondos S.A., y su posterior retorno a Porvenir S.A., manifestó que se dio por sugerencia del jefe inmediato, quien le comentó que podía afiliarse a dichas AFP, lo cual fue aceptado por la accionante, aclaró que simplemente le indicaron que la afiliación respectiva le era favorable, afirmación en la cual confió.

Finalmente, indicó que no fue asesorada antes de cumplir 47 años de edad.

Destáquese que la deponente NO aceptó tener una formación en seguridad social de la que pudiese predicarse una comprensión del tema, máxime cuando ni siquiera se acreditó la existencia de una explicación completa por parte del asesor.

En todo caso, en gracia de discusión, lo cierto es que no se vislumbra una suficiente ilustración, ni siquiera en asuntos tan relevantes como aportes voluntarios, pese a la trascendencia de este aspecto en la obtención de una pensión en un monto mayor en contraste con la que percibiría del régimen de prima media, máxime si este es uno de los atractivos con los que más se publicita este sistema; tampoco se le habló de modalidades de pensión, la posibilidad de acceder a una garantía de pensión mínima, los requisitos para causar la prestación por vejez en uno y otro régimen, las principales diferencias de cada uno, lo atinente a la redención del bono pensional y ello sólo por mencionar algunos aspectos que debieron ser abordados en esa reunión inicial. Pero nada de ello se dijo, o por lo menos no se acreditó.

Tampoco existían las herramientas financieras o la tecnología para realizar algún tipo de cálculo, de ahí que esta Sala cuestione la dificultad para establecer, en aquella época, cuál régimen le era más

favorable a una persona, pues realmente el monto de la pensión es uno de los aspectos que tiende a inclinar la balanza a la hora de la escogencia de un fondo, prestación en un principio depende de un capital mínimo exigido, punto que NO ERA clarificado en forma suficiente para efectos de que una persona entendiera que de NO alcanzar el ahorro necesario NO se pensionaría, o por lo menos que la prestación dependía del capital acumulado en toda la vida laboral, aunado a la incidencia de factores externos impredecibles a futuro (composición del grupo familiar, fluctuación de los IBC y variación del mercado, etc) haciéndole un estimativo de cuánto dinero se requería sólo para financiar un salario mínimo, panorama bajo el cual entendería la necesidad de planear su futuro pensional para acceder a una cuantía mayor, pero tal aspecto también se omitió, o por lo menos, se insiste, no se acreditó lo contrario.

Empero, lo antes expuesto no debe comportar un foco de distracción, pues era a la administradora del RAIS y no a la parte actora, a la que le correspondía probar, como se indicó, que con antelación al diligenciamiento del formulario de traslado mediaba un consentimiento informado, el que en el caso aquí analizado se echó de menos. Ello aunado a que ninguna confesión podría desprenderse de la versión dada por la accionante, pues se insiste, ni siquiera le explicaron las ventajas y desventajas de cada régimen.

Así las cosas, acogiendo los postulados sentados por nuestro órgano de cierre, se **CONFIRMARÁ** la decisión en este punto.

Ha de agregarse que ninguna variación genera la **MOVILIDAD** entre diferentes administradoras del RAIS que se presentó en el caso de la señora BEATRIZ ELENA RAMIREZ, quien en 1995 se vinculó a Colpatria S.A., y posteriormente efectuó movilidad a Colfondos S.A., para finalmente retornar a Porvenir S.A. conforme se aprecia en el reporte del SIAFP (fl. 55 del archivo 07 del expediente digital), siendo Horizonte hoy Porvenir S.A. el fondo donde actualmente permanece desde el último cambio efectuado en el año 2000. Lo anterior por cuanto, de un lado, importa examinar lo acontecido al momento de cambiar de régimen, y de otro lado, cuando hay movilidad entre fondos privados, la asesoría NO suele referirse a las características del sistema de prima media, mucho menos a las implicaciones del cambio de sistema pensional, dado que son otras circunstancias las que se resaltan; no es lo mismo promover el cambio de una administradora a otra, a promover un cambio de régimen pensional, pues en el primer caso, por regla general, sólo se publicita la rentabilidad de uno u otro fondo.

En todo caso, si las AFP incumplieron su deber de información y por consiguiente debe declararse la ineficacia de la afiliación al régimen de ahorro individual con solidaridad, esa determinación implica privar de todo efecto práctico al traslado, por lo que mal haría esta Magistratura en siquiera pensar o

asimilar una MOVILIDAD entre administradoras del RAIS, a una convalidación, por definirlo de alguna manera, de un acto jurídico que nunca existió.

Fue precisamente este el raciocinio de la Sala de Casación Laboral en sentencia de radicación SL4705-2021, cuando recalcó que:

En consonancia con lo antes señalado, debe resaltar la Corte que, desde la sentencia CSJ SL, 9 sep. 2008, rad. 31989, se ha sostenido que, una vez acreditada la ineficacia del traslado al régimen de ahorro individual, **el acto jurídico no se torna en eficaz por los cambios que los afiliados hagan entre administradoras privadas** lo que ha sido reiterado entre otras en las providencias CSJ SL2877-2020, CSJ SL1942-2021 y CSJ SL1949-2021

El anterior criterio es el que se encuentra vigente en la jurisprudencia de la Sala; motivo por el cual se recoge cualquier otro que le sea contrario y, frente a la cual se advierte que, como la declaratoria de ineficacia del traslado tiene como sustento el incumplimiento del deber de información en el traslado inicial, **al estar afectado el acto jurídico primigenio, los negocios jurídicos subyacentes adolecen de igual afectación**, entre ellos los traslados que se efectúen a los diversos fondos privados, ello en tanto que, el efecto de la declaratoria de ineficacia es volver al statu quo, lo que implica retrotraer la situación al estado en que se hallaría si el cambio de sistema pensional no hubiera existido jamás (CSJ 4025-2021, CSJ SL4062-2021, CSJ SL 4064-2021, entre muchas otras).

Luego entonces, para la Sala es claro que, en el presente asunto ni de la afiliación inicial, como tampoco de los traslados posteriores entre los diferentes fondos privados se evidencia que se hubiese recibido una información integral, completa y oportuna que brindara una ilustración respecto de las características, condiciones del mercado, ventajas y desventajas de cada uno de los regímenes pensionales, así como de las contingencias financieras que tal decisión supondría en su derecho o como se dijo en la sentencia CSJ SL 6 oct.2021, rad.83576 « no prueba por sí mismo y mucho menos genera una especie de presunción relativa a que la voluntad reflexiva de la persona afiliada al materializar su acto de traslado de régimen pensional y de los posteriores tránsitos entre administradoras estaban nutridos con la debida ilustración en los términos explicados, ni así lo ha previsto el legislador».

Por lo tanto, la Sala insiste y reitera que **el solo hecho de que el afiliado se traslade en varias oportunidades dentro del RAIS, no puede convalidar, ni suplir el incumplimiento del deber de información por parte de la AFP al momento del traslado inicial** y los traslados posteriores, así como tampoco resulta ser evidencia de que el afiliado fue informado debidamente en los términos exigidos por la ley y la jurisprudencia y, menos aún puede considerarse que dicha circunstancia modera las consecuencias que ello supone en la eficacia del acto jurídico celebrado; todo esto bajo el contexto de que en el proceso quede por establecido que efectivamente el demandante no fue debidamente informado. (Resaltos de la Sala)

De otro lado, ha de precisarse que la aludida ineficacia no sólo implica el retorno de los dineros que se encuentren en la cuenta de ahorro individual de la demandante, dígame aportes obligatorios, rendimientos, entre otros, sino que además acarrea a las administradoras del RAIS accionadas, trasladar a Colpensiones E.I.C.E todos los valores que hubieren recibido con motivo de la afiliación, en los términos referidos por la Corte Suprema de Justicia en la sentencia de radicación 31.989, providencia donde la Sala de Casación Laboral adujo que la administradora debía asumir con cargo a su propio patrimonio, los deterioros sufridos por el bien administrado, incluyendo los gastos de administración en que hubiere incurrido, concepto que abarca los costos de administración, primas de seguros de invalidez y sobrevivientes, además del porcentaje destinado al Fondo de Garantía de la

Pensión Mínima de acuerdo a lo previsto en el art. 20 de la Ley 100 de 1993, punto en el que se **CONFIRMARÁ** la sentencia de primera instancia.

Y es que cuando se presenta MOVILIDAD, es decir, la persona se traslada entre distintas administradoras del RAIS, se considera necesario señalar que tal obligación respecto de los valores a retornar NO debe recaer exclusivamente en cabeza de la última entidad afiliadora en que estuvo, como en este caso lo es Porvenir S.A., ni mucho menos se circunscribe al tiempo en que la persona estuvo en ese último fondo, de ahí que el retorno de los gastos de administración se extienda respecto de la época en que permaneció Colfondos S.A.

Empero, se advierte procedente **REVOCAR PARCIALMENTE** el numeral segundo de la Sentencia apelada, respecto a la orden impartida a las AFP accionadas para cubrir la diferencia resultante en el evento en que los conceptos trasladados a Colpensiones, resulten inferiores al valor total del aporte legal en el caso en que la accionante hubiera permanecido en el RPM, lo anterior, por cuanto no se acreditó en el proceso un detrimento en el capital que debe recibir COLPENSIONES E.I.C.E. con destino al Fondo Común que se constituye para financiar las pensiones del régimen de prima media; teniendo en cuenta que además de los recursos de la cuenta de ahorro individual con los respectivos rendimientos, con la orden impuesta a PORVENIR S.A. y COLFONDOS S.A. de trasladar igualmente, comisiones de administración, seguros previsionales y aportes al fondo de garantía de pensión mínima, los tres últimos indexados, y que se deben integrar al Fondo común que administra COLPENSIONES para garantía de las pensiones del régimen de prima media, se está garantizando que el fondo pensional público reciba todos los valores que debió percibir en el evento en que el accionante hubiere permanecido afiliado a esa entidad. Además, que tampoco quedó establecido el detrimento o desmedro de los aportes que se acumularon en el RAIS.

Y es que la Sala de Casación Laboral, de cara a los efectos de la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen pensional, ha sido pacífica en que ello trae como consecuencia para el fondo de pensiones del régimen de ahorro individual con solidaridad, la devolución con cargo a sus propios recursos de los gastos de administración, razonamiento plasmado, entre otras, en la sentencia de radicación 85325 noviembre de 2020, cuando señaló que:

“(…) genera, como consecuencia, la de retrotraer la situación al estado en que se encontraba como si el acto nunca hubiera existido, es decir, se debe hacer la ficción de que el traslado nunca ocurrió, lo que conlleva, por parte de las administradoras privadas, a trasladar a COLPENSIONES, el capital ahorrado junto con los rendimientos financieros, con los gastos de administración y comisiones con cargo a sus utilidades (al efecto, pueden consultarse, entre otras, las sentencias de casación CSJ SL 31989, 9 sep. 2008, CSJ SL4964-2018, CSJ SL4989-2018, CSJ SL1421-2019 y CSJSL1688-2019)”

Y nuevamente en las sentencias de radicación 77.804 y 68.087 (M.P. Gerardo Botero Zuluaga) ambas de 2020, rememoró la CSJ SL, 8 sep. 2008, rad. 31989, en la que se dijo:

“Como la nulidad fue conducta indebida de la administradora ésta debe asumir a su cargo los deterioros sufridos por el bien administrado, esto es, las mermas sufridas en el capital destinado a la financiación de la pensión de vejez, ya por pago de mesadas pensionales en el sistema de ahorro individual, ora por los gastos de administración en que hubiere incurrido, los cuales serán asumidos por la Administradora a cargo de su propio patrimonio, siguiendo para el efecto las reglas del artículo 963 del C.C.

Tal pensamiento también fue reiterado en la sentencia 78.667 (M.P. Clara Cecilia Dueñas Quevedo), cuando adujo que:

De modo que, a juicio de la Corte, si bien no se pueden desconocer las reglas para las *restituciones mutuas* contempladas en el artículo 1746 del Código Civil, lo trascendente en la declaratoria de ineficacia de un acto jurídico es el restablecimiento de la legalidad que impone la eliminación de los efectos del acto configurado contrario a derecho y permitir, cuando las circunstancias así lo posibiliten, retrotraer las cosas al estado en que estaban como si el negocio no se hubiere celebrado.

En el *sub lite*, la devolución de todos los recursos acumulados en la cuenta de ahorro individual en el RAIS debe ser plena y con efectos retroactivos, porque los mismos serán utilizados para la financiación de la pensión de vejez a que tiene derecho la demandante en el régimen de prima media con prestación definida. Ello, incluye el reintegro a Colpensiones de los valores que cobraron los fondos privados a título de cuotas de administración y comisiones, incluidos los aportes para garantía de pensión mínima, pues será aquella entidad la encargada del manejo de esos recursos y del reconocimiento del derecho pensional

(...) De modo que, en este caso, la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen pensional deben asumirla todas las entidades del régimen de ahorro individual a las que estuvo vinculado la actora, sin importar si tuvieron o no injerencia, o si participaron o no en el cambio de régimen pensional. Y aún en el evento de que Porvenir S.A. y Colfondos S.A. se consideren terceros, le asiste razón al actor en cuanto afirma en su oposición que, en dicha situación, es aplicable el artículo 1748 del Código Civil. En consecuencia, las AFP deben reintegrar los valores que recibieron a título de cuotas de administración y comisiones.

(...)Así, es claro que no le asiste razón al recurrente cuando refiere que «*las sumas depositadas en el fondo de garantía mínima no están en su poder*», debido a que el recaudo y manejo de las sumas destinadas al fondo de garantía mínima en el RAIS, en la actualidad, está a cargo de las administradoras de pensiones.

Y es que, no puede verse afectada la sostenibilidad financiera del régimen de prima media con prestación definida, debiendo garantizarse que COLPENSIONES E.I.C.E. reciba una suma equivalente a la que hubiese generado con rendimientos financieros, en caso de que la demandante jamás se hubiese trasladado, y es claro que de acuerdo con la forma como se distribuyen las cotizaciones en el RAIS, parte de ellas se imputó a gastos de administración, compañías aseguradoras y el Fondo de Garantía de Pensión Mínima, sumas que como se dijo no puede ser inferior al monto total del aporte legal correspondiente en caso de que la afiliada hubiere permanecido bajo la administración de COLPENSIONES E.I.C.E., máxime si la ineficacia conlleva devolver las cosas a su estado original.

Empero, ello NO quiere decir que los rendimientos causados estén llamados a engrosar las arcas de la administradora del RAIS, pues si bien corresponden a unas utilidades acumuladas por años, generadas por las diferentes inversiones realizadas por los fondos privados en cumplimiento de la eficiente gestión que les impuso la ley, lo cierto es que dichos rendimientos son uno de los ítems que conforman la cuenta de ahorro individual, que como su nombre lo dice, pertenece al afiliado y cuando este se traslada de régimen, los dineros depositados allí necesariamente pasaran al fondo común administrado por prima media.

Tal razonamiento también encuentra soporte en lo normado por el literal d) del art. 60 de la Ley 100 de 1993, según el cual el conjunto de las cuentas individuales de ahorro pensional constituye un patrimonio autónomo propiedad de los afiliados, denominado fondo de pensiones, el cual es independiente del patrimonio de la entidad administradora.

Conforme los razonamientos que preceden, y pese a los juicios argumentos que en este punto ventila Porvenir S.A., no es dable acoger su postura, ni aun teniendo en cuenta el concepto que cita de la Superintendencia Financiera de Colombia, toda vez que el mismo no resulta vinculante, pues el criterio que resulta vinculante es el que de forma pacífica y reiterada ha sostenido la Corte Suprema de Justicia, en las sentencias reseñadas, que constituyen un precedente vertical de obligatorio cumplimiento.

De otro lado, respecto a la indexación de los tres ítems que componen los costos de administración, esta Magistratura considera procedente **CONFIRMAR** el fallo, toda vez que tal dinero (costos de administración, primas de seguros de invalidez y sobrevivientes, además del porcentaje destinado al Fondo de Garantía de la Pensión Mínima), debe ser entregado a Colpensiones E.I.C.E debidamente indexado por parte de Porvenir S.A. y Colfondos S.A., teniendo en cuenta como índice inicial el IPC certificado por el DANE a la fecha de pago de cada aporte y como índice final el vigente a la fecha de devolución aquí ordenada, aplicando la siguiente fórmula: $\text{Indexación} = \frac{\text{índice final}}{\text{índice inicial}} \times \text{capital} - \text{capital}$. Ello por cuanto una vez entre tal dinero al patrimonio de Colpensiones, el mismo se habrá visto envilecido por el paso del tiempo.

Ya la Sala de Casación Laboral se ha pronunciado sobre estos efectos, cuando indica que la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen pensional trae como consecuencia para el fondo de pensiones del régimen de ahorro individual con solidaridad, la devolución con cargo a sus propios recursos de los gastos de administración debidamente indexados, posición que se puede consultar en las providencias SL4811-2020, SL3207-2020, SL1688-2019, SL3202-2021, SL3706, SL3707, SL3708, SL3710 y SL3349-2021.

También resulta necesario señalar que, conforme múltiples pronunciamientos de la Sala de Casación Laboral, consúltense las sentencias de radicación SL4803-2021 y SL3710-2021¹, al momento de cumplirse la orden impartida, Porvenir S.A. y Colfondos S.A. deberán discriminar los conceptos entregados a Colpensiones E.I.C.E, detallando en forma pormenorizada a que corresponden cada uno de los valores entregados, punto en el que se **ADICIONARÁ** el fallo proferido por la a quo.

Es importante señalar que, si bien para el año 1995 cuando se efectuó el traslado al RAIS, la accionante no se encontraba cotizando al ISS, este no es un supuesto factico que desligue, desborde o distorsione los efectos de la ineficacia de la afiliación, pues la esencia de tal concepto, se direcciona a subsanar el defecto informativo ocasionado por el actuar de la AFP, de forma tal que la afiliada tenga la certeza de haber tomado una decisión previa e informada, y al retrotraer las cosas al estado anterior, de ninguna manera se puede entender que la accionante permanezca sin afiliación al sistema de seguridad social en pensiones, por el contrario, al existir una omisión en la información brindada por parte de la AFP, y siguiendo el tenor del Acto Legislativo 01 de 2005, su retorno debe ordenarse a COLPENSIONES como único administrador del régimen de prima media con posterioridad a la entrada en vigencia del sistema general de pensiones, más aún cuando para la fecha del traslado, la demandante fungía como afiliada obligatoria al sistema de conformidad con lo expuesto por el artículo 15 de la Ley 100 de 1993.

Finalmente, en cuanto a la solicitud de revocatoria de la condena de trasladar el bono pensional a Colpensiones, si bien la demandante cumplió la edad de redención el 11 de agosto de 2021, esta Sala se abstendrá de efectuar pronunciamiento alguno, por cuanto, conforme a los documentos aportados al plenario, no se registra un soporte probatorio que acredite la redención del mismo, por el contrario, a folio 89 del archivo 07 del expediente digital, se aprecia que el estado general del bono pensional se encuentra en “liquidación provisional” estado que no constituye una situación jurídica concreta y consolidada, por lo que no es posible determinar la entrada efectiva de estos valores a la Cuenta de Ahorro Individual de la accionante, de este modo, resultaría inocuo un análisis sobre valores que aún no han ingresado al patrimonio de la actora, de forma tal que si hay lugar a ello, será Colpensiones como administradora del RPM, la entidad encargada de su trámite y posterior redención.

En consecuencia, la decisión adoptada en primera instancia será **CONFIRMADA** por encontrarla ajustada a los antecedentes normativos y jurisprudenciales que se han expedido en torno al tema, **adicionándola** en los aspectos antes aludidos.

¹ Concretamente dispusieron que: *Al momento de cumplirse esta orden, los conceptos deberán aparecer discriminados con sus respectivos valores, junto con el detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y demás información relevante que los justifiquen.*

Se condenará en costas en esta instancia a Porvenir S.A. a favor de la demandante por no haber tenido éxito en la apelación. Se fijarán como agencias en derecho la suma de \$1.160.000.

5 DECISIÓN DEL TRIBUNAL.

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Tercera de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, **DECIDE:**

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 02 de marzo de 2023 por el Juzgado Doce Laboral del Circuito de Medellín, dentro del proceso ordinario laboral instaurado por la señora **BEATRIZ ELENA RAMIREZ** identificada con la cédula de ciudadanía Nro. 42.678.197, en contra de **PORVENIR S.A., COLFONDOS S.A. y COLPENSIONES E.I.C.E.**

SEGUNDO: ADICIONAR el numeral segundo de la providencia bajo el entendido que PORVENIR S.A. Y COLFONDOS S.A. deberán discriminar los conceptos entregados a COLPENSIONES E.I.C.E., detallando en forma pormenorizada a que corresponden cada uno de los valores

TERCERO: REVOCAR PARCIALMENTE el numeral segundo de la providencia, respecto a la orden impartida a las AFP accionadas para cubrir la diferencia resultante en el evento en que los conceptos trasladados a Colpensiones E.I.C.E. resulten inferiores al valor total del aporte legal en el caso en que la accionante hubiera permanecido en el RPM, conforme a lo indicado en la parte motiva de la providencia.

CUARTO: Costas en esta instancia a cargo de PORVENIR S.A. Se fija como agencias en derecho la suma de \$1.160.000. a favor de la demandante.

Lo anterior se notificará por **EDICTO** que se fijará por la Secretaría por el término de un día.


Los Magistrados
(Firmas escaneadas)



ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA



MARIA NANCY GARCIA GARCIA



MARTHA TERESA FLOREZ SAMUDIO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
SALA LABORAL



SECRETARÍA

EDICTO

El Secretario de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín:

HACE SABER:

Que se ha proferido sentencia en el proceso que a continuación se relaciona:

Proceso:	ORDINARIO LABORAL- apelación.
Demandante:	BEATRIZ ELENA RAMIREZ.
Demandado:	COLPENSIONES E.I.C.E, PORVENIR S.A. y COLFONDOS S.A.
Radicado No.:	05001-31-05- 012-2022-00244-01.
Tema:	ineficacia traslado
Decisión:	CONFIRMA Y ADICIONA SENTENCIA.
Fecha de la sentencia:	18/08/2023.

El presente edicto se fija en la página web institucional de la Rama Judicial <https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/148> por el término de un (01) día hábil, con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 *ibidem*. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

Se fija hoy 22/08/2023 desde las 08:00 am. y se desfija a las 05:00 pm.

RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
Secretario